

Costa Rica: El actual estilo nacional de desarrollo y sus principales tendencias¹

Jorge Rovira

Con el propósito de apelar a la concisión y a la claridad, esta contribución se ha organizado en seis partes relativamente breves cada una de ellas, las que se expondrán seguidamente.

Sobre el concepto de *estilo nacional de desarrollo*

La importancia del concepto de *estilo nacional de desarrollo*, noción que es diferente a la de patrón o modelo de desarrollo, radica, en la versión propuesta por Graciarena², en que vuelve a colocar en el centro del análisis a los factores sociopolíticos y a la lógica

1. Esta breve comunicación se fundamenta en gran medida, aunque de manera actualizada, en dos artículos publicados por el autor: “El sistema de partidos en devenir”, en Jorge Rovira Mas (Editor), *Desafíos políticos de la Costa Rica actual*, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007, pp. 109-136; y “El nuevo estilo nacional de desarrollo de Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio”, en María Flores-Estrada y Gerardo Hernández (Eds.), *TLC con Estados Unidos. Contribuciones para el debate. ¿Debe Costa Rica aprobarlo?* San José: Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, 2004, pp. 309-346.
2. Este trabajo aprovecha las inspiradoras ideas de Jorge Graciarena, quien fuera director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicadas en un artículo suyo poco conocido, aparecido precisamente en uno de los primeros números de la *Revista de la CEPAL*, “Poder y estilos de desarrollo. Una perspectiva heterodoxa”, en *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, Naciones Unidas, segundo semestre de 1976, pp. 175-193.

política que subyace al proceso de desarrollo, entendido éste como un proceso de cambio social estructural de largo plazo.

El *estilo nacional de desarrollo* es una **resultante histórica** en materia de valores, prácticas e instituciones, que surge y se va decantando a partir de la contraposición y el conflicto entre actores sociales y políticos que portan distintos proyectos de desarrollo y que disponen de diferenciados recursos de poder para procurar imponerlos o para resistir su implantación. Es de dicha dinámica conflictiva en mayor o menor grado, abierta o relativamente silenciosa, de la cual emerge, como **resultante histórica**, el movimiento específico que sigue una sociedad durante un periodo determinado.

Cuatro componentes conceptuales y analíticos son importantes a la hora de aprehender un *estilo nacional de desarrollo*: los **factores condicionantes**, los **factores determinantes**, que son fundamentalmente sociopolíticos y de índole interna a la sociedad en cuestión, la **dirección predominante** que sigue el estilo y el **ritmo o tempo** con el cual se va concretando.

El nuevo *estilo nacional de desarrollo* de Costa Rica

Desde hace poco más de dos décadas se ha venido configurando lo que se puede calificar como un nuevo *estilo nacional de desarrollo* en Costa Rica, distinto al que prevaleció durante su “edad dorada”, la de 1950 hasta 1979. En estas tres décadas el crecimiento económico anual real como promedio anduvo en alrededor del 6 por ciento, el desarrollo social fue muy intenso e incluyente, y en su transcurso además la sociedad costarricense logró algo que en el resto de América Latina resultó muy huidizo: la *consolidación del régimen político democrático representativo*. Estos procesos muy progresivos en las dimensiones económica, social y política le dieron al país una rara especificidad en el concierto de las sociedades latinoamericanas e incluso, más aún, en el conjunto de los países de la periferia del sistema capitalista mundial.

Sin embargo, tras la crisis económica de 1980-1982, tan profunda como la de los años treinta del siglo XX, ese *estilo nacional de desarrollo* alcanzó sus límites estructurales, por razones del entorno económico internacional, por el contexto político regional centroamericano y por factores políticos de índole nacional. La crisis planteó al desnudo su inviabilidad en el futuro y abrió nuevos escenarios para el desarrollo del país, obligando a los distintos actores sociales, políticos y partidarios a emplearse a fondo para administrar la crisis primero y para ir buscando nuevas alternativas después. Tras la inicial estabilización alcanzada durante los primeros años de la administración del presidente Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) del Partido Liberación Nacional (PLN), hacia 1985 Costa Rica comenzó tenuemente a enrumbarse hacia un nuevo *estilo nacional de desarrollo*.

Se distingue aquí, entre 1985 y el año 2007, dos subperiodos en él. El primero transcurre entre 1985, cuando se aprueba el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), y 1994-1995, años estos últimos que forman parte de la administración de José María Figueres Olsen del PLN; y el segundo, que va de 1995 hasta el presente. La distinción se fundamenta en la lógica política y en el carácter del conflicto sociopolítico que subyace a cada subperiodo en la implementación del nuevo *estilo nacional de desarrollo* de Costa Rica.

El primer subperiodo (1985-1995), los factores intervinientes, la dirección y el ritmo

Sus factores condicionantes han sido fundamentalmente los siguientes:

- La crisis del capitalismo tras tres décadas de gran expansión luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, la ralentización entonces del crecimiento de la economía internacional y la reestructuración global del sistema capitalista a partir de finales de los años setenta del siglo XX e inicios de los ochentas, así como la progresiva configuración de una nueva división internacional del trabajo que entre varias de sus manifestacio-

nes empezó a propiciar la inversión extranjera directa (IED) de modo masivo en la periferia. Esto ha venido aconteciendo cada vez más en ramas de la economía que requieren de mano de obra bien calificada que ha sido preparada por los países receptores de la IED sin costo para el capital transnacional y que reduce sus costos de producción, al igual que aumenta la tasa de ganancia de esas empresas que producen bienes que se exportan hacia el mercado mundial, sobre todo pero no únicamente hacia los países centrales. Una derivación de este proceso es el estímulo a una competencia ardiente entre las naciones de la periferia, favorecida por los movimientos del capital productivo salidos del centro, por atraerse a estos.

- La hegemonía que por alrededor de dos décadas y media, a partir de inicios de los años ochenta del siglo XX, recobró el pensamiento económico neoclásico en su versión neoliberal en materia de políticas económicas, lo cual llegó a cristalizar en el ideario del denominado Consenso de Washington de finales de los ochenta. Y concomitantemente, dos fenómenos ideológicos en paralelo: el debilitamiento del movimiento político socialdemócrata y de sus postulados ideológicos en el mundo entero, por un lado, y el declinio del enfoque keynesiano en las políticas económicas, por otro, en ambos casos con una débil capacidad de respuesta frente a los nuevos retos teóricos e ideológicos posicionados por neoclásicos y liberales.
- La importancia que llegaron a adquirir los organismos financieros internacionales (OFIs: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y como agencia nacional, la Agencia para el Desarrollo Internacional [AID] de EE.UU.), con importantes consecuencias para exigir y condicionar políticas económicas acordes con el Consenso de Washington en las naciones de la periferia, con el fin de redireccionar y reorganizar las economías que enfrentaban problemas financieros y de crecimiento.
- La crisis política del conjunto de los regímenes autoritarios del ciclo de larga duración histórica de la Posguerra en Centroamérica (1944-1979), que condujo al triunfo de la

Revolución Sandinista en Nicaragua (1979), al golpe de Estado de octubre de 1979 en El Salvador y el inicio de una prolongada guerra civil, a la entrega tutelada del poder por los militares a los civiles en Honduras en 1980-1981, y al inicio de la transición a la democracia en Guatemala en 1983-1984.

A su vez, los factores políticos determinantes para el impulso del nuevo *estilo nacional de desarrollo* de Costa Rica a partir de los años ochenta, fueron inicialmente los siguientes:

- A raíz de la crisis económica de 1980-1982 en el país, con la cual se empezó a cancelar el precedente *estilo nacional de desarrollo* (1950-1979) en el marco condicionante ya señalado, se inició un duradero acercamiento entre las dos élites políticas principales que habían rivalizado entre sí desde mediados de los años cincuenta del siglo XX. En efecto, tras la negociación culminada en diciembre de 1982 para reformar el Código Electoral y permitir así que los derechos adquiridos a la financiación estatal a las campañas electorales pudieran trasladarse de los partidos que conformaban coaliciones (Coalición Unidad, en 1982) a nuevos partidos nacidos de ellas, esto condujo a la aparición de un sistema partidario de *formato bipartidista* de tipo cártel, concretado por fin con la fundación del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a finales de 1983. Entre el PLN y el PUSC, actores partidarios principales, a la par de la lucha que les ha sido propia bajo un régimen democrático, se fue desarrollando también una *mecánica de competencia* caracterizada por la colusión entre las élites de estas dos organizaciones, orientada a repartirse posiciones y prebendas gracias al control que entre ambas han venido ejerciendo sobre el Estado y sus instituciones, debilitándose el control político que corresponde a los partidos de oposición en un régimen democrático.
- Este bipartidismo, liderado por el PLN (1951) y el PUSC (1983), entre 1986 y 1994, durante tres procesos electorales generales (1986, 1990 y 1994), concentró entre el 97 por ciento y el 98 por ciento de los votos presidenciales, resultó en alternancia,

y permitió una concentración en el número de diputados de más del 90 por ciento entre estos dos actores del sistema partidario (véanse los cuadros 1 y 2 en el Anexo). El *mimetismo ideológico*, la *similitud en las ofertas de campaña electoral* y la *semejanza en la práctica gubernativa* tendieron a prevalecer. Una coalición de intereses empresariales de nuevos exportadores, importadores y un emergente sector financiero respaldaron a ambos partidos políticos. Una nueva clase media, poco a poco constituida con base en la incipiente prosperidad de este sector privado, empezó a apoyar un nuevo proyecto de crecimiento económico y de modernización detrás de dicha coalición de intereses empresariales y de élites políticas coludidas, aunque no dejaran de existir conflictos y tensiones por el curso que se le quería imprimir a la sociedad y por el ritmo con el cual se procuraba su concreción.

- Se inició así el movimiento de cambio de la sociedad costarricense en **dirección** hacia una **modernización** que hay que adjetivarla como **neoliberal**, pues no todas las modernizaciones contemporáneas tendrían que poseer necesariamente este perfil. Es decir, una modernización doctrinariamente a favor del **mercado** y claramente orientada a descalificar y a debilitar las funciones económicas que en general de manera exitosa, aunque también con algunos desaciertos y excesos, había adquirido y puesto en práctica el Estado costarricense entre los años 1950-1979, todo ello con el fin de abrirle nuevos espacios de acumulación al capital privado nacional y transnacional.

Ahora bien, a pesar de que dicho redireccionamiento de la sociedad orientado a recolocar al mercado como la institución económica central comenzó a avanzar, uno de los rasgos más llamativos del nuevo *estilo nacional de desarrollo* de Costa Rica ha sido el del **ritmo** con el cual se ha ido implementando. Se ha repetido con insistencia que fue “gradualista” y parsimonioso, y se ha afirmado con machacona simpleza que ha sido así por un rasgo idiosincrásico del carácter social básico del costarricense, que es reacio al cambio abrupto. Pero lo peculiar de esta modalidad de cambio social tan resistente a las manías de *shock* y de privatizaciones masivas de empresas estatales

y de esferas de acumulación, que fueron tan comunes en América Latina hacia finales de los años ochenta e inicios de los noventa en el marco del Consenso de Washington (piénsese en el México de Salinas de Gortari, en la Argentina de Ménen, en la Colombia de César Gaviria, como algunos ejemplos), fue la **resistencia social** que logró concretarse en el país de cara al proyecto de modernización neoliberal emprendido por las élites partidarias coludidas con el respaldo y el beneplácito de las élites empresariales. Inicialmente llevada a cabo por parte de campesinos, a ellos luego los sustituyeron en la lucha contra dicha modernización los sindicalistas de las instituciones autónomas y del sector público en general, y los trabajadores del sector de la educación y la salud comprometidos con las instituciones del Estado Benefactor y del Estado Intervencionista. Esta **resistencia social** se enmarcó, eso sí también, en una competencia política electoral muy reñida entre los dos partidos principales al cobijo de una institucionalidad democrática operante, lo que constituye un componente clave de cualquier explicación para comprender ese carácter “heterodoxo” de la implementación de las reformas económicas en Costa Rica, por cierto pasado por alto hasta el presente (véase en el cuadro 1 las diferencias en votos válidos para presidente entre el partido ganador y el perdedor entre 1986 y 1994, que resultaron muy pequeñas). Lo que se quiere relevar es que además de la **resistencia social** directa, las élites partidarias han tenido buenas razones para temer hasta muy recientemente una reacción electoral que las perjudicara en su competencia democrática entre sí, habida cuenta de que las elecciones de los años 1986-1994 se decidieron de manera sumamente reñida entre los dos actores del bipartidismo, a veces por menos del 2 por ciento de los votos válidos, como llegó a suceder en 1994.

Fue esta dinámica política de **resistencia social**, acompañada con la necesidad sentida por las élites de escuchar la reacción popular y de temerla en términos electorales a pesar de que ambas en su conjunto contaran con tantos recursos de poder en el marco de su relativa coincidencia programática, fue ello –es lo que aquí se sostiene– lo que actuó a favor del gradualismo y lo que ha hecho posible que Costa Rica haya preservado muchas de sus institucio-

nes estatales principales hasta el día de hoy, y lo que le permitió a nuestra sociedad soslayar las ventas aceleradas de activos públicos y los negociados con ellos, cuya venta se festinó en tantos países latinoamericanos en los anteriores 20 años.

El segundo subperiodo (1995-2007) y los cambios en las luchas políticas en contra de la modernización neoliberal

Este subperiodo puede caracterizarse como el de la impaciencia de una nueva generación de empresarios y de políticos, con el apoyo de algunos sectores de las clases medias, por avanzar con mucha mayor rapidez en la dirección modernizadora neoliberal con la cual se ha querido orientar el cambio social. Valga decir, impaciencia por hacer prevalecer la lógica del mercado en todas las instituciones y prácticas de la vida económica y social, por privatizar empresas o generar apertura de mercados y abrir nuevos espacios a los operadores particulares y a la acumulación de capital, así como en la dirección de disminuir la intervención del Estado, propiciando su descalificación por distintos medios, los de comunicación uno de ellos.

Este subperiodo estuvo entonces signado en su inicio desde el punto de vista político por el acuerdo entre el PLN y el PUSC simbolizado por medio del Pacto Figueres-Calderón de 1995, presidente el segundo entre 1990-1994, y Figueres entre 1994-1998 como ya se señaló, un acuerdo entre los dos hijos de los principales reformadores que le dieron vida a las instituciones claves de la sociedad costarricense en la segunda mitad del siglo XX. Un acuerdo que representaba la llegada de una nueva generación política y empresarial que buscaba deshacer lo que habían heredado de sus padres y dentro de la cual se empezaron a concebir nuevas maneras de quebrar definitivamente la resistencia social de los opositores a la modernización neoliberal. Desde entonces, la ruptura del monopolio de los bancos estatales para la captación de depósitos del público (1995), lo que modificaba una decisión capital adoptada en 1948 mediante la cual se empezaron a establecer nuevos y du-

raderos deslindes entre lo público y privado; la agresión sobre los derechos de pensiones del sector magisterial y los intentos por fabricar leyes con las cuales debilitar la institución divisa del desarrollo nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), todo ello conciliado por el PLN y el PUSC, fueron parte principal de la agenda modernizadora neoliberal en Costa Rica.

Esta acción política se topó, no obstante, con una resistencia aún mayor hacia el final del siglo e inicio del presente, reflejada en la reacción de numerosos sectores de la sociedad frente al denominado “Combo del ICE” (2000), un paquete de leyes concebido fallidamente para, en segunda preferencia con respecto a la privatización, prohijar una apertura más amplia y definitiva del mercado de la energía y de las telecomunicaciones, en manos del Estado con razonable eficacia y precios muy accesibles para los consumidores hasta el día de hoy inclusive.

Habida cuenta del éxito limitado (porque avances hubo aunque con **ritmo** despacioso) en la transformación con **dirección** neoliberal del nuevo *estilo nacional de desarrollo*, la negociación por parte de la administración Pacheco (2002-2006) del PUSC, llevado a cabo entre el 2003 y el 2004, de un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC), procuró otra vez, mediante un nuevo expediente, ahora el de un tratado de libre comercio que desde un primer momento se vio con claridad que era muchísimo más que eso, quebrar por fin el marco legal y regulatorio dentro del cual había prosperado el *estilo de desarrollo* de 1950 a 1979. Si bien firmado inicialmente entre gobiernos, no logró la administración Pacheco hacerlo aprobar por el Congreso de la República al final de su gestión, a diferencia de lo que sí sucedió en los parlamentos de los restantes socios en el Tratado.

Si de alguna manera será recordada entonces la nueva administración del presidente Óscar Arias Sánchez (2006-2010) del PLN, lo será por haberse constituido en el operador político que, si bien de modo en extremo precario tanto por los resultados de su elección en el 2006 como presidente, al igual que por los resultados del referéndum del 7 de octubre del 2007 (en ambos casos con míni-

mas diferencias electorales a su favor), consiguió la aprobación del TLC. Arias ha sido la figura política a la cual tuvieron que apelar con urgencia y ya con cierta desesperación, y en una mutuamente beneficiosa conjunción de intereses, las nuevas coaliciones empresariales, nacionales, regionales e internacionales, para derrotar la resistencia social al cambio en el *estilo de desarrollo* de Costa Rica, a fin de confirmar su **dirección** y acelerar su **ritmo** de concreción en un sentido pro mercado y dirigido a minar los alcances de las funciones del Estado y a despejar nuevos ámbitos para la acumulación del capital privado.

El nuevo estilo nacional de desarrollo: sus rasgos sobresalientes

Pero, ¿cuáles son los rasgos más destacables, a modo en extremo sintético, del nuevo *estilo nacional de desarrollo* de Costa Rica?

1. Crecimiento económico mediano (alrededor del 4,4 por ciento como promedio anual en términos reales entre 1985 y el año 2007), mucho menor que el de algo más del 6 por ciento anual del periodo 1950-1979, lo cual, ciertamente, no podría calificarse como un mal desempeño en perspectiva latinoamericana aunque sí con respecto a la propia evolución previa seguida por Costa Rica. Pero un crecimiento con elevada volatilidad interanual. Considerable diversificación de las exportaciones y aumento en el valor de ellas. Costa Rica es uno de los dos o tres principales exportadores per cápita de América Latina en la actualidad. IED con mucho dinamismo, especialmente en la última década, que invierte en ramas de elevado o mediano componente tecnológico, además de la inversión en el dinámico sector de servicios turísticos. La IED goza de excepcionales ventajas en Costa Rica: aprovecha la mano de obra calificada que se ha preparado gracias a la acumulación histórica de recursos humanos con fondos locales de la sociedad costarricense; disfruta de numerosas exenciones y bajísima contribución fiscal. En general es un sector de empresas con impacto valioso pero limitado en lo concerniente a la cantidad

de mano de obra que contrata (alrededor de un 2,7 por ciento de la Población Económicamente Activa), pero que ha contribuido a generar una nueva clase media proclive a favorecer la modernización neoliberal. Se trata de un nuevo subsector de empresas, *dinámicas* económicamente hablando pero escasamente *dinamizadoras* de la economía en su conjunto por los débiles encadenamientos internos que genera con el resto de la economía. Dicho subsector es un componente destacado de una estructura económica con marcada heterogeneidad, dado que el resto de la economía tiene niveles de modernización empresarial medianos y bajos.

2. Pobreza estancada en los últimos 14 años: alrededor del 20 por ciento de las familias son pobres desde entonces (1994), habiendo sido imposible reducir este umbral, con excepción de un par de años, uno de los cuales ha sido el 2007, aunque resulta plausible adelantar que en el 2008 y en el 2009, en el nuevo contexto de la crisis económica internacional, podría volver a situarse alrededor de aquella tendencia.
3. En los últimos diez años la desigualdad en el ingreso se ha incrementado, habiendo estado por debajo de 0,400 como valor del coeficiente de Gini hasta 1998 y habiéndose localizado dicho valor en el transcurso de la última década en alrededor del 0,43. Ello se ha visto acompañado por la imposibilidad política habida hasta el día de hoy, en medio de una sociedad cada vez con mayor cantidad de ingreso y riqueza pero con creciente concentración de ellos en los estratos altos y medios altos, de lograr aumentar los niveles de recaudación fiscal de modo sustantivo y además de manera no regresiva. (En los dos últimos años, 2006-2007, se ha aumentado la carga tributaria de alrededor del 14,5 por ciento como porcentaje del PIB, al 16 por ciento o poco más, pero se trata de valores que distan mucho de lo que podría conseguirse de actualizarse el potencial contributivo existente en los antes mencionados estratos de ingreso y en las empresas transnacionales, potencial contributivo que se requeriría materializar para atender los enormes retos que en infraestructura y desarrollo social tiene por delante la sociedad costarricense

para preservar sus logros históricos como sociedad, disminuir la creciente brecha socioeconómica e incluso seguir creando condiciones propicias para el arribo de la IED).

4. Otra resultante histórica de este subperiodo del nuevo *estilo nacional de desarrollo* es el malestar político incrementado en contra de las élites partidarias tradicionales, el cual ha derivado hacia un incremento notorio del abstencionismo (del 19 por ciento en 1994 al 30 por ciento en 1998 y hasta casi el 35 por ciento en el 2006, casi su duplicación porcentual, sobre lo cual puede verse el cuadro 3 en el Anexo); hacia el debilitamiento de las lealtades partidarias tradicionales, hacia la volatilidad electoral y hacia la aparición de nuevos partidos (que entre los dos más importantes en el 2006 sobrepasaron el total de votos válidos para presidente que conjuntamente sumaron el PLN y el PUSC, como puede apreciarse en el cuadro 1), de los cuales uno es de extrema derecha en el sentido de la derecha libertaria, el Movimiento Libertario (ML), por un lado, y el otro un partido de centro, el Partido Acción Ciudadana (PAC), este segundo en particular expresa ese malestar en contra de quienes quieren debilitar a toda costa el papel del Estado en la sociedad nacional y que constituye en la actualidad la segunda fuerza partidaria en importancia en el Congreso. Partidos que, no obstante, aún no han sido capaces de forjar nuevas lealtades partidarias alternativas y probablemente duraderas. Se trata de tendencias políticas y electorales que son reflejo inequívoco de lo siguiente:

- 4.1 De la cada vez mayor dificultad que ha venido teniendo el sistema partidario en su viejo y ahora superado formato bipartidista con mecánica competitiva colusiva, de cumplir con las funciones de mediación e integración política con respecto a la sociedad durante el proceso de cambio social que hemos venido viviendo a raíz de la progresiva institucionalización de un nuevo *estilo nacional de desarrollo*.

- 4.2 De una transición aún incierta que experimenta la sociedad costarricense en el *formato* y en la *dinámica* de su sistema de partidos.

En suma, si se quisiera resumir de modo sumamente sintético las grandes tendencias prevaecientes en la **dirección** y el **ritmo** que sigue el *estilo nacional de desarrollo*, tendríamos las siguientes:

- Inclinación muy fuerte hacia las exportaciones en materia de estrategia de desarrollo.
- Reprodutor de *heterogeneidad* en cuanto a la estructura económica.
- Propenso a segmentar acusadamente a la sociedad costarricense, incrementando la desigualdad en el ingreso y la desigualdad social en general, así como inclinado a debilitar la *inclusividad* de distintos sectores dentro del desarrollo nacional, inclusividad que fue un rasgo primordial de la evolución seguida por Costa Rica entre 1950 y 1979.
- Transición incierta pero con potencial de renovación del sistema partidario.
- Con una **dirección** crecientemente **pro mercado**, que se acompaña con una capacidad menor por parte del Estado, condicionado y atado como estará por el marco jurídico que se deriva del TLC, para intervenir y moderar los efectos de una economía más amarrada en tal dirección.
- Y con un **ritmo** que tenderá a acelerarse en dicha **dirección pro mercado** tras la aprobación del TLC en el Congreso, lo que podría ocurrir en el transcurso del año 2008.

Las alternativas

Cabe para finalizar explorar brevemente las alternativas de corto y mediano plazo. Y para ello corresponde no olvidar que las alternativas siempre son alternativas políticas y de políticas en el proceso de cambio social.

El problema inicial que se confronta para la construcción de alternativas viables, que en su contraposición con la **dirección** prevaleciente comentada aquí pudiera producir una **resultante histórica** distinta, es de dos órdenes. El primero proviene del hecho de que la oposición a los dos actores históricos del bipartidismo promotor de la dirección dominante en el nuevo *estilo nacional de desarrollo*, se ha caracterizado fundamentalmente por su capacidad para la resistencia, pero sin que se haya construido aún una opción alternativa en positivo. El segundo proviene de la división que reina entre los actores sociales y políticos inscritos en el amplio conjunto que conforma la oposición frente a la forma como se ha venido decantando el nuevo *estilo de desarrollo del país*. Esta división alcanzó su punto máximo recientemente tras el resultado del referéndum del 07 de octubre del 2007 para decidir si se aprobaba o no el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y EE.UU., luego del cual ha venido prevaleciendo malestar, resentimiento y suspicacia mutua entre el Movimiento Patriótico y otros actores sociales, por un lado, y el PAC, por el otro.

En la actualidad, de la capacidad o incapacidad que tengan las fuerzas opositoras para coligarse o al menos para propiciar acuerdos mediante los cuales producir acciones concertadas y así poder presentar no sólo un frente más cohesionado sino igualmente el contar con una propuesta de alternativa de políticas de desarrollo innovadora y sólida, además de atractiva para distintos sectores sociales y políticos, de todo ello dependerá la posibilidad de lograr una articulación de actores que puedan incidir en la moderación de las tendencias más inconvenientes que hoy propenden a consolidarse en el proceso de desarrollo costarricense. Esto último remite particularmente al debilitamiento de las funciones económicas y sociales del Estado, al incremento en la desigualdad socioeconómica y al pertinaz estancamiento en la proporción del número de familias pobres en Costa Rica.

ANEXO

Cuadro 7.1.A
Costa Rica: Número de votantes e intención del electorado para la elección presidencial
(1986-2006)

Partidos Políticos	1986		1990		1994		1998		2002		2006	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Total	1.185.222	100,0	1.349.014	100,0	1.490.097	100,0	1.388.698	100,0	1.529.845	100,0	1.623.992	100,0
Mayoritarios	1.162.748	98,0	1.331.290	98,7	1.450.667	97,3	1.276.868	92	1.491.803	97,8	1.506.298	92,9
Tradicionales	1.162.748	98,0	1.331.290	98,7	1.450.667	97,3	1.270.994	91,6	1.065.307	69,9	722.206	44,5
PLN	620.314	52,3	636.701	47,2	739.339	49,6	618.834	44,6	475.030	31,2	664.551	41
PUSC	542.434	45,7	694.589	51,5	711.328	47,7	652.160	47	590.277	38,7	57.655	3,5
Otros importantes	--	--	--	--	--	--	5.874	0,4	426.496	27,9	784.092	48,4
PAC	--	--	--	--	--	--	--	--	400.681	26,3	646.382	39,9
Mov. Libertario	--	--	--	--	--	--	5.874	0,4	25.815	1,6	137.710	8,5
Minoritarios	22.474	2,0	17.724	1,3	39.430	2,7	111.830	8,0	38.042	2,2	117.694	7,1

FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.

Costa Rica: Número de diputados elegidos por partido político (1986-2006)
Cuadro 7.2.A

Partidos Políticos	1986		1990		1994		1998		2002		2006	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Total	57	100,0	57	100,0	57	100,0	57	100,0	57	100,0	57	100,0
Mayoritarios	54	94,6	54	94,6	53	92,9	51	89,5	56	97,9	53	92,9
Tradiccionales	54	94,6	54	94,6	53	92,9	50	87,8	36	62,9	30	52,6
PLN	29	50,8	25	43,8	28	49,1	23	40,3	17	29,7	25	43,8
PUSC	25	43,8	29	50,8	25	43,8	27	47,5	19	33,2	5	8,8
Otros importantes	--	--	--	--	--	--	1	1,7	20	35	23	40,3
PAC	--	--	--	--	--	--	--	--	14	24,5	17	29,8
Mov. Libertario	--	--	--	--	--	--	1	1,7	6	10,5	6	10,5
Minoritarios	3	5,4	3	5,4	4	7,1	6	10,5	1	2,1	4	7,1

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones.:

Costa Rica: Abstencionismo de las elecciones presidenciales (1986-2006)
Cuadro 7.3.A

AÑO	Porcentaje
1986	18,2
1990	18,2
1994	18,9
1998	30,0
2002	31,1
2006	34,8

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones.